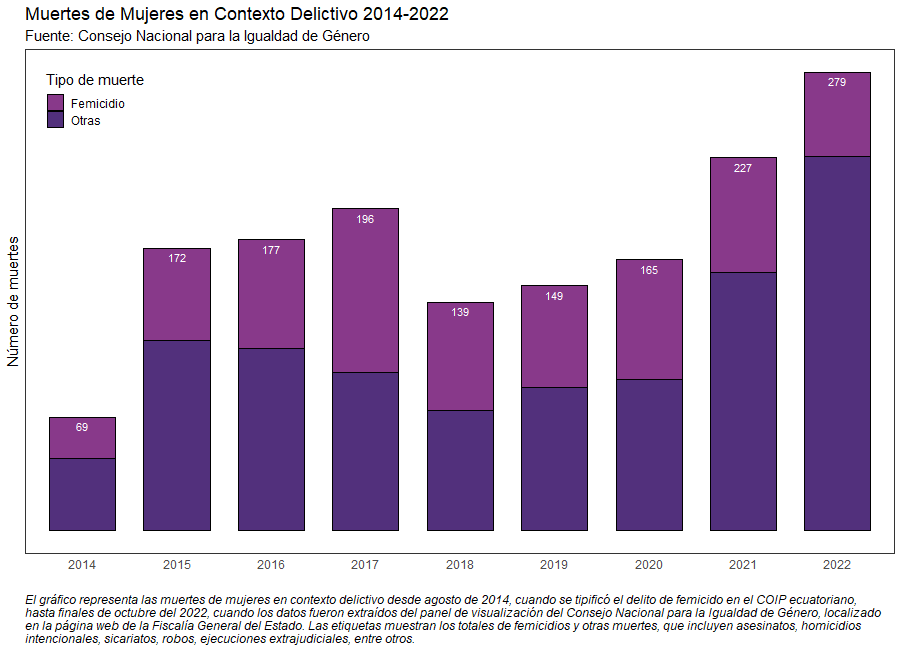
Muertes Violentas de Mujeres en Ecuador

Alejandra Marchán y Daniel Sánchez

2022-11-17

# Muertes Violentas de Mujeres en Ecuador



En Ecuador existe un recuento de muertes violentas de mujeres desde agosto 2014, año en el que se tipificó el delito de femicidio en el COIP[[1]](#footnote-23) hasta finales de 2022, momento en el que los autores recuperaron los datos del [reporte](https://www.fiscalia.gob.ec/analitica-muertes-de-mujeres-en-contexto-delictivo/) presentado periódicamente por el Gobierno Nacional, mediante la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia[[2]](#footnote-25). La información recopilada del reporte se puede observar en el gráfico de arriba. Las cifras separan a las muertes de mujeres en dos categorías diferentes, siendo una los *femicidios*, un delito introducido en el COIP de 2014, artículo 141: “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”[[3]](#footnote-26).

La minoría de muertes violentas de mujeres durante el período se clasifican como femicidios, quizás debido a la dificultad de la categorización de la misma. La definición del delito en el COIP sitúa al femicidio como un crimen de odio contra la mujer *por el hecho de serlo*, sin embargo, al ser dificultoso conocer con certeza los motivos verdaderos del criminal, los agentes de la ley se han centrado en aspectos conductuales y sentimentales de las víctimas y/o victimarios para poder sentenciar a los femicidas[1]. Por esta razón sería adecuado considerar que las cifras de femicidios reportados por el gobierno pueden estar considerablemente subestimadas. Sería natural observar las cifras de muertes violentas de mujeres que no han sido categorizados como femicidios para poder superar esa subestimación.

Este gráfico también contempla las cifras de muertes de mujeres en contexto delictivo en categorías ajenas al femicidio. Se incluye aquellas muertes de mujeres por “homicidios intencionales”[[4]](#footnote-27), asesinato, sicariato, robo, ejecución extrajudicial, secuestro extorsivo, abandono de persona, violación, acto de odio, abigeato, extralimitación en un acto de servicio, entre otros. Bajo esta aclaración, sería posible llegar a la conclusión que dada la dificultad de la sentencia de un femicidio, buena parte de los *femicidios reales* podrían estar dentro de esta cifra, pero no podemos saber en qué proporción.

Un hecho notable es que el año 2022, sin haberse terminado aún, presenta un notable aumento en muertes violentas de mujeres respecto al 2021 y es, de hecho, el año con mayor número de muertes para el que se cuenta con información. Esto podría sugerir que el 2022 ha sido un año especialmente violento para las mujeres. Respecto al 2021, el 2022 presenta alrededor de un 20% más del total de muertes violentas para el año anterior. Este preocupante hallazgo preliminar abre el camino hacia varias preguntas necesarias para caracterizar este incremento, preguntas que son difíciles de responder en la manera en la que se manejan los datos sobre violencia de género en el Ecuador. ¿Existió realmente un aumento en los delitos de odio hacia la mujer? ¿Tiene algo que ver la ola de violencia[3] relacionada al narcotráfico con este aumento?, pero más que nada, ¿de dónde provienen los datos y se puede asegurar su veracidad?

Si bien algunas de estas preguntas las pudimos responder parcialmente, las conclusiones que pudimos obtener solo dan paso a más preguntas sobre la manera en la que el Ecuador maneja la información sobre delitos violentos, especialmente de femicidios, y cómo se la utiliza (si ha alguna vez se lo ha hecho) para generar política pública.

# El Problema Estadístico y Organizacional

La posibilidad de que el 2022 sea el año más violento para las mujeres del Ecuador definitivamente ameritó un análisis más profundo, sin embargo, el reporte oficial no brinda accesso directo a los datos ni a un documento exhaustivo sobre su metodología de elaboración. Lo poco que se logró conocer es que el aumento en muertes de mujeres en contexto delictivo se debió a muertes que *no* son femicidios, pero debido al problema que mencionamos anteriormente, esto no nos dice mucho. En esta etapa, podría sugerirse que la ola de violencia reciente del Ecuador podría tener algo que ver con el aumento de las muertes de mujeres en contexto delictivo, pero no se puede asegurar si esto tiene que ver con delitos de odio hacia la mujer.

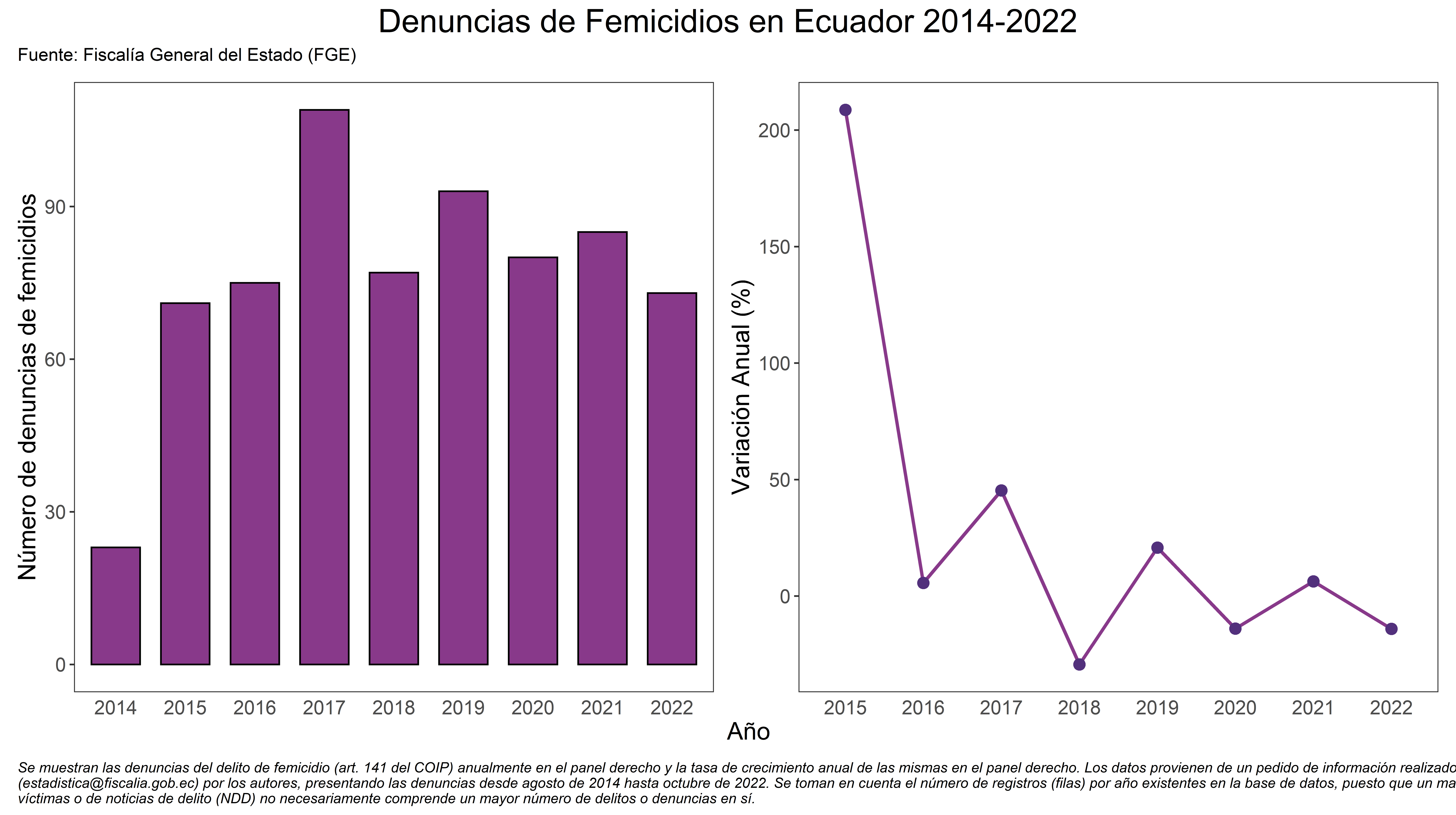
Nuestra investigación nos llevó al Ministerio de Gobierno, una de las instituciones que participa dentro de la comisión del reporte oficial, en donde encontramos bases de datos abiertas en los [Indicadores de Seguridad Ciudadana](http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php) sobre femicidios, homicidios intencionales, entre otros. Pudimos determinar que las cifras de femicidios coinciden al 100% con las cifras del reporte oficial, las cuales se pueden visualizar hasta el 2014 a nivel anual y mensual. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno desde el 2014 ha dejado de diferenciar todos las muertes a nivel de género. El filtro de género, que hasta el 2013 el Ministerio de Gobierno utilizaba para mostrar la diferencia de muertes entre hombres y mujeres, no arroja cifras verdaderas sino valores de “NO DETERMINADO”. Esto imposibilita verificar la fuente de las cifras del reporte oficial para las muertes de mujeres de categoría diferente a femicidios, por lo que el aumento en muertes seguía sin ser explicado. La poca seriedad con la que se manejan las bases de datos abiertas al público por parte Gobierno se hace evidente, ya que sí cuenta con bases de datos más completas, pero no las ha puesto a disposición pública.

Si bien el reporte oficial no proporciona la base de datos con la cual genera sus visualizaciones, éste nos redirecciona al [sitio web de estadísticas](https://www.fiscalia.gob.ec/estadisticas-fge/) de la Fiscalía General del Estado (FGE) en caso de necesitar más información. Desafortunadamente, éste último tampoco pone a disposición pública la base de datos mediante la cual se crean las visualizaciones de la página web. Sin embargo, la FGE dispone de un correo electrónico[[5]](#footnote-31) para realizar pedidos de información. Realizamos un pedido de información inicial para varios delitos tipificados en el COIP[[6]](#footnote-32), la cual fue atendida a debido tiempo, pero nos encontramos con varias sorpresas.

En primer lugar, no existe una forma de calcular un número de femicidios por mes o año de la forma en la que se presenta en el Ministerio de Gobierno para esta base de datos, puesto que la base de datos de la FGE tiene una unidad de análisis de denuncias y no de víctima o victimario. Entendiendo esto, no se comprende cómo se realizan las visualizaciones que presenta la FGE en su sitio web de estadísticas, puesto que éstas últimas si presentan un número de femicidios que pueden ser estudiados a nivel mensual y/o provincial.

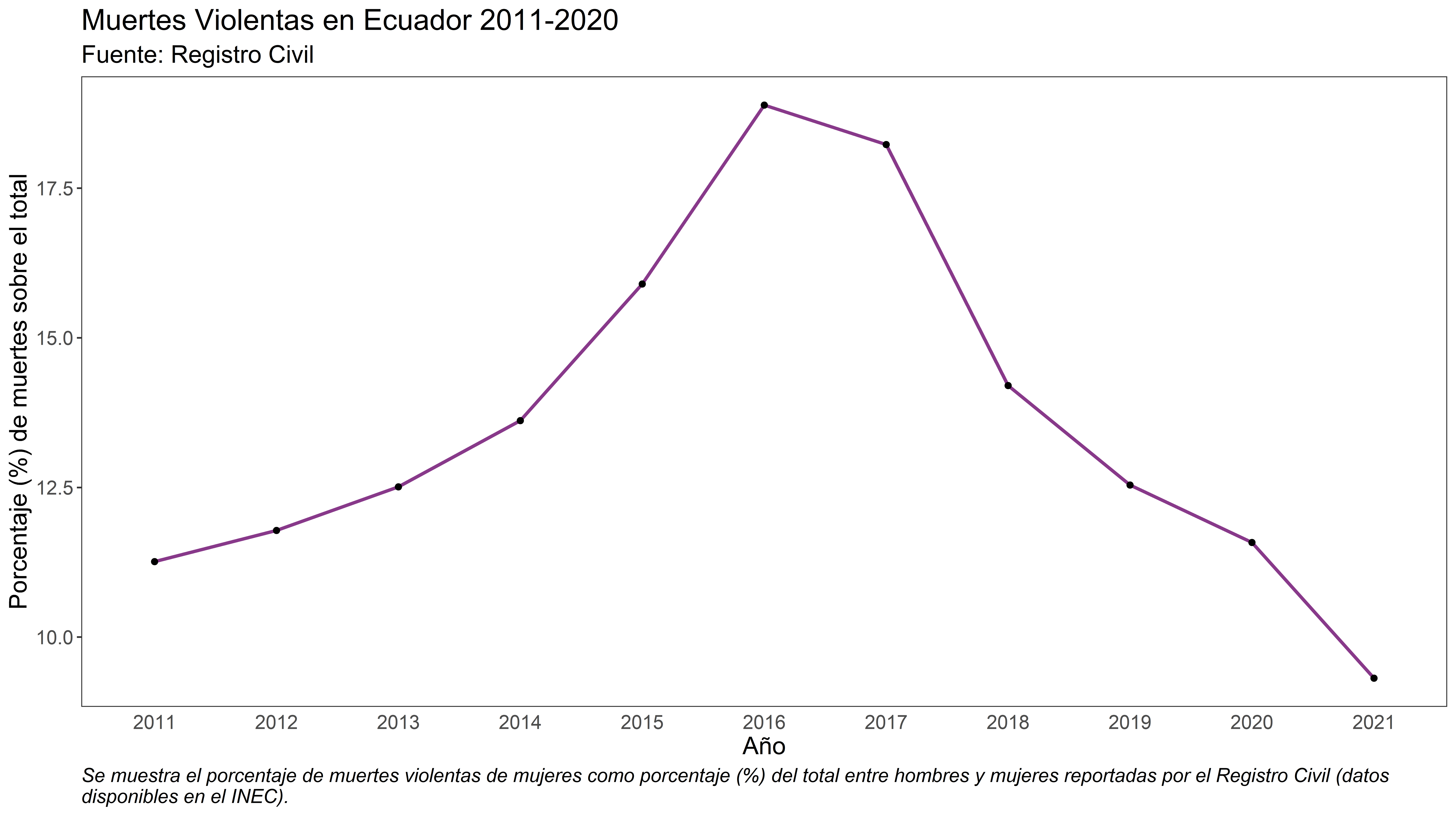
Si bien la información que nos enviaron incluyó información desde el 2014 en adelante para todos los delitos solicitados, se nos dijo que no se podía proporcionar información suficiente para diferenciar víctimas por género, debido a que *en algunos casos las víctimas no son identificadas o son desconocidas y por tanto la variable tiene subregistro.* En lugar de un número de muertes de mujeres, como presenta el reporte oficial, la información que nos envió la fiscalía nos *remite un valor porcentual* sin una interpretación clara, puesto a que no existe una explicación exacta sobre la forma en la que este porcentaje se construye en la base de datos. Sigue sin ser clara la manera en la que se calculan las muertes de mujeres en contexto delictivo del reporte oficial presentado por el Gobierno.

Los analistas de la FGE mencionaron que *se debe observar que la Fiscalía dispone de información de gestión procesal de la justicia. El tema de sentencias corresponde a la Judicatura. Es más, para determinar propiamente al sujeto como víctima o victimario se debe considerar las sentencias.* Esto lleva a entender que la información que la FGE está dispuesta a proporcionar no es suficiente para generar las visualizaciones que ellos presentan (y de acuerdo a sus documentos, que también elaboran). Sin embargo, de ser este el caso, debería mencionarse en las visualizaciones, no después de varios días de haber hecho una solicitud de información. Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura no cuenta con un sitio web o un correo electrónico específico para pedidos de información estadística. Una vez más, se evidencia una grave falta de seriedad en la administración pública de la información, que ponen en entredicho la veracidad de los datos presentados en reporte oficial.



De todas maneras, se utilizaron los datos enviados por la FGE para analizar el delito de femicidio desde 2014 a 2022. Como se esperaría con un delito tipificado recientemente, el número de denuncias aumentó de forma empinada con el tiempo, estabilizándose gradualmente. Se tiene una tasa de crecimiento considerable después de la introducción del delito (sobrepasando el 200%), lo que probablemente corresponde a denuncias de femicidios que *no* sucedieron durante ese mismo año. Este es uno de los problemas estadísticos a los que tanto analistas como instituciones públicas se enfrentan analizando datos de delitos: solamente será observable la denuncia, pero no el crimen en sí. Esto genera dos problemas diferentes para nuestros propósitos: (1) el número de denuncias dentro de un año puede ser de crímenes cometidos en años anteriores, especialmente las denuncias realizadas en enero y (2) existe un gran número de crímenes que jamas se llegan a denunciar. En general, si bien el movimiento de las denuncias contra femicidios se mueve en la misma tendencia que los femicidios provistos por el reporte oficial y el Ministerio de Gobierno, no es posible llegar a conclusiones más profundas que a las que hemos llegado anteriormente.

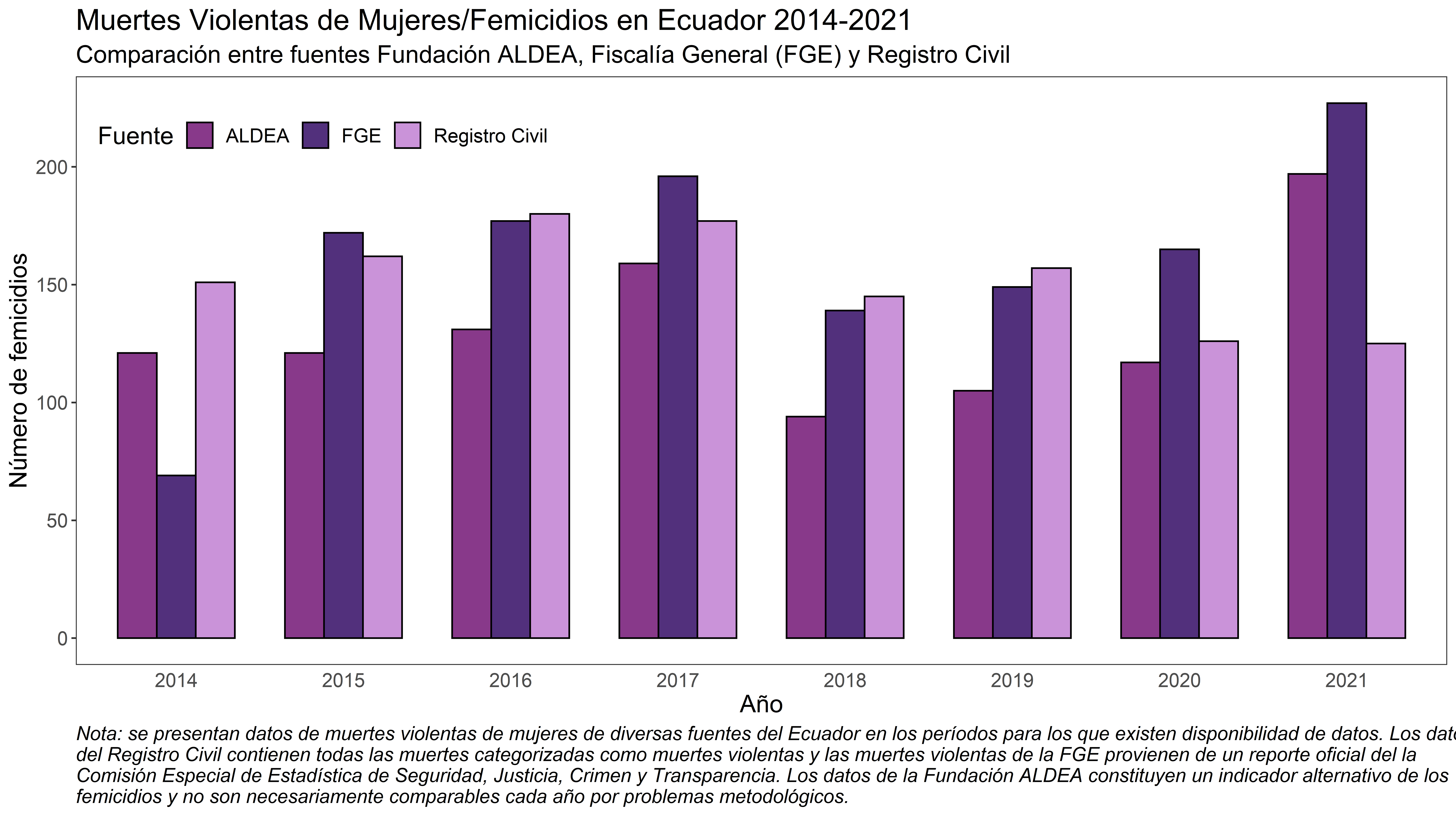
Debido a estos problemas, decidimos acudir a fuentes externas a las instituciones mencionadas en el reporte oficial. En primer lugar, revisamos la información de defunciones generales de Registro Civil, disponible en el sitio web del [INEC](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/defunciones-generales/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202021%20se,de%20la%20publicaci%C3%B3n%20es%20anual.). De esta fuente pudimos obtener el número de muertes violentas, en donde sí es posible realizar una diferenciación a nivel de género. Sin embargo, el problema aquí es que no existe una categorización de muertes por delito, debido a que el Registro Civil no es una institución enfocada en el ámbito legal. Lo mejor que se puede hacer es realizar una comparación de muertes violentas entre hombres y mujeres, en donde la cifra de muertes violentas de mujeres es comparable al total de muertes de mujeres en contexto delictivo que se puede ver en el primer gráfico de este artículo. A continuación, graficamos el porcentaje de muertes violentas de mujeres como porcentaje del total de muertes violentas (hombres y mujeres). Se puede observar que las muertes violentas (de forma relativa) llegaron a su pico más alto durante el 2017 y desde ese año han caído considerablemente; de hecho se encuentran en su punto más bajo en 2022.



# Los datos de la sociedad civil

Con el objetivo de tener información de una fuente que no esté manejada por el Estado, tomamos en cuenta los datos recopilados por la Alianza Feminista para el mapeo de *femi(ni)cidios*[[7]](#footnote-41) en Ecuador, una alianza de varias organizaciones sociales ecuatorianas, que, entre sus objetivos, planifica proponer un indicador alternativo para los femicidios en el país. La Alianza es apoyada por la Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas[5]. Las [cifras](http://www.fundacionaldea.org/mapas) han sido reportadas principalmente por la Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), mediante un [reporte interactivo](http://80.241.217.8/mapas_estadisticos/femi_pro/#) que presenta y describe los datos de forma general.[6] realizan una revisión sistemática de estos datos. En cuanto a metodología, se detalla que los datos se recopilan en concordancia con “criterios de la normativa nacional e internacional, las variables definidas a partir del Protocolo latinoamericano y ecuatoriano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género” y los métodos de la [Red Latinoamericana contra la violencia de Género/MundoSur](https://mundosur.org/mlf/) una asociación civil con sede en Francia y Argentina enfocada en proyectos de género y derechos humanos.

Esta última organización se ha enfocado en generar una sistematización del monitoreo y visibilización de feminicidios en América Latina desde la pandemia del COVID-19, en donde se determina que la manera de contabilizar los feminicidios está sujeta a cambios en cada país, puesto que para construir las bases de datos de MundoSur, la organización ¨respetó el criterio utilizado por cada fuente/país para la caracterización del femicidio/feminicidio”[7] (p. 8). Si bien se menciona en la página web de MundoSur que desde 2021 se creó una co-metodología de contabilización de femicidios[8], no existen documentos metodólogicos que la describan. Se entiende que las definiciones comunes que entrelazan los datos de feminicidios entre los miembros de organización son los posibles sujetos activos y pasivos del crimen de feminicidio: en caso del sujeto pasivo o víctima: “se entenderá por víctima a toda mujer o grupo de mujeres que sufra o haya sufrido femicidio […] se entiende por mujer, cualquier persona que se autoperciba como tal” (p.7), lo que permite la posibilidad de contabilizar transfemicidios y en caso del sujeto activo o perpetrador: “puede ser cualquier persona (varón, en la mayoría de las legislaciones) o grupo de particulares (como en los casos de redes de prostitución o de trata de personas, pandillas, mafias, u otras formas de crímenes organizados).” (p.9). Estas definiciones son consistentes con el [Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de la muerte violenta de mujeres por razones de género, femicidio/feminicidio](https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano#:~:text=El%20Modelo%20de%20Protocolo%20latinoamericano,la%20violencia%20contra%20las%20mujeres.)[[8]](#footnote-46), que ALDEA habria adoptado desde 2017[6]. Particularmente,[6] señalan que, entre los datos de femicidios recopilados por ALDEA, se consideran asesinatos de mujeres en contextos de narcotráfico (ej. la pareja de un narcotraficante). Esto representa un problema para comparar esta fuente con otras, puesto que, como hemos visto anteriormente, los casos contra femicidas suelen construirse mayormente en casos de relaciones sentimentales tornadas violentas, y no en casos de delincuencia organizada. Esto hace que necesariamente el indicador de ALDEA sea siempre superior al indicador del reporte oficial del gobierno, puesto que éste último siempre separa muertes violentas de mujeres en contextos de delicuencia organizada, por lo que en el gráfico siguiente comparamos los datos de ALDEA con las muertes violentas (totales) del reporte oficial (abreviado como FGE) y con los datos del Registro Civil.



Existe, adicionalmente, un problema adicional con el indicador de ALDEA y se debe al hecho de que en el año 2021 se empezaron a incluir los asesinatos de mujeres por sicariato a manera de femicidio[6], lo que no es consecuente con la tipificación de femicidio según la legislación ecuatoriana. El considerable aumento de 2020 a 2021 es artificial por esta misma razón, puesto a que antes del 2021 ALDEA no había tomado en cuenta sicariatos en sus cifras. Por esto, no se puede esperar que el indicador de ALDEA sea igual al indicador del Ministerio de Gobierno de femicidios debido a estos detalles (incluyendo además los transfemicidios, que el Gobierno Nacional ignora completamente), por lo que la comparación del gráfico anterior es la adecuada. En este caso, el indicador de ALDEA subestima las muertes violentas de mujeres, sin embargo, debido a que el indicador es inestable a través de los años, no se puede asegurar la comparabilidad año a año de esta cifra.

Considerando este problema, se podría analizar las cifras entre 2021 y 2022, sin embargo, no incluimos datos del 2022 al no existir datos disponibles para el Registro Civil para un año que aún no ha terminado. Nos contactamos con la fundación ALDEA para solicitar acceso directo a sus datos e investigar un considerable aumento de los femicidios (de la forma que esta organización los mide), pero lastimosamente nuestra solicitud no fue aprobada por los responsables de la organización, quienes citaron preocupaciones de privacidad al liberar las bases de datos. Esto dificulta la tarea de analizar el importante aumento de femicidios en el 2022, en donde del 1 de enero hasta el 31 de mayo se habrían cometido alrededor del 60% de femicidios que se cometieron en el 2021[9]. Sin embargo, debido a la inclusión de los sicariatos y muertes en contexto de delincuencia organizada en este indicador, se podría argumentar que los femicidios han aumentado debido al aumento generalizado de la violencia en el Ecuador de los últimos dos años, tal y cómo nos permiten ver los datos del Gobierno Nacional.

# El Problema de Rendición de Cuentas

El presente análisis cuantitativo de los datos disponibles sobre las muertes violentas de mujeres nos permiten llegar a las siguientes conclusiones:

* Tanto en 2017 como en 2022 han existido picos de muertes violentas de mujeres en el Ecuador, medidas por el indicador de femicidios oficial del Gobierno Nacional.
* Lastimosamente, no existe una forma clara de investigar a que se deben los movimientos de muertes violentas de mujeres en contexto delictitvo debido a la falta de apertura de los datos de las numerosas instituciones públicas que los reportan.
* Buena parte del aumento de las muertes violentas de mujeres (total) en 2022 se debe a un aumento de las muertes violentas que **no** se categorizaron como femicidio, es decir, muertes como sicariatos, homicidios, asesinatos, entre otros delitos tipificados en el COIP.
* La Fiscalía General del Estado ofrece una base de datos de denuncias de femicidios y otros delitos, pero no permite realizar un análisis adecuado de víctimas y victimarios, por lo que se desconoce como las instituciones públicas calculan los indicadores presentados en los reportes que se presentan al público.
* Las organizaciones civiles han denunciado la falta de seriedad en la presentación de datos de violencia de género del estado ecuatoriano, sin embargo, aún no ha aparecido una iniciativa clara para solucionar este problema; un indicador alternativo al oficial fue analizado, pero no es posible sacar mayores conclusiones debido a una falta de precisión metodológica y apertura de datos.
* No es posible determinar si es que el 2022 es definitivamente un año particularmente violento hacia las mujeres o hacia todos los ecuatorianos en general: buena parte del análisis sugiere que es el aumento sostenido de la violencia de los últimos dos años lo que parece estar correlacionado con el aumento de muertes de mujeres, pero no podemos estar seguros sin un mejor acceso a los datos.

La falta de seriedad en la publicación de datos y en el mantenimiento de bases de datos abiertas evidencian un problema grave: el problema de rendición de cuentas, en donde las instituciones estatales muestran poco o ningún incentivo de demostrar al público lo que se investiga y lo de que se pretende hacer justicia. La sociedad civil definitivamente lleva varios pasos por delante, pero debemos caminar hacia el acceso abierto si se pretende realmente llegar a un ambiente de libre intercambio de información para formular una mejor política pública. Sin un sistema fiable de contabilizacion de muertes violentas, no existirán mecanismos de rendición de cuentas en donde las instituciones públicas encargadas de mantener la paz y/o perseguir la justicia justifiquen su razón de existir y donde los tomadores de decisiones puedan crear política basada en información científica. La *mediocridad cuantitativa* del estado ecuatoriano no es más que una consecuencia de la gigantesca dificultad que existe en navegar el coloso estatal, este coloso ha existido desde tiempos inmemorables, por lo que no se puede culpar a un gobierno u otro de su existencia[[9]](#footnote-51), sino más bien empezar a preguntarse de cómo solucionar el problema.

1. Físcalía General del Estado. (n.d.). *Fiscalía General del Estado | “Tipificar el femicidio es un gran paso de la legislación ecuatoriana”, fiscal Tania Moreno*. <https://www.fiscalia.gob.ec/tipificar-el-femicidio-es-un-gran-paso-de-la-legislacion-ecuatoriana-fiscal-tania-moreno/>

2. Consejo Nacional de Igualdad de Género. (2022). *Analítica muertes de mujeres en contexto delictivo*. <https://www.fiscalia.gob.ec/analitica-muertes-de-mujeres-en-contexto-delictivo/>

3. *Homicidios, motines carcelarios y estado de excepción: ¿por qué hay una ola de violencia en Ecuador?* (2021). <https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/20/violencia-estado-excepcion-ecuador-orix/>

4. Panamá, G.-L. E. de. (n.d.). *Femicidio o feminicidio, ¿cuál es el término correcto?* <https://www.laestrella.com.pa/nacional/191124/femicidio-feminicidio-termino-correcto>

5. *Desarrollo de herramientas y estudios sobre femicidio en Ecuador*. (n.d.). <http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/desarrolloherramienta>

6. Zambrano, G. C., & Guerra Garcés, G. (2022). *Femicidios en Ecuador: Realidades ocultas, datos olvidados e invisibilizados* (p. 78). <https://nube.fundacionaldea.org/index.php/s/QqmLd25Ex596g36>

7. MundoSur. (2020). *Mapa Lationamericano de Feminicidios: Marco Teórico* (p. 15). <https://mundosur.org/wp-content/uploads/2021/09/Mapa-Latinoamericano-de-Femicidios.-MT.pdf>

8. MundoSur. (n.d.). *¿Quiénes somos? MUNDOSUR*. <https://mundosur.org/sobre-mundosur/>

9. Trujillo, Y. (2022). *Alianza Mapeo: En lo que va del 2022 ya se ha producido el 60*. <https://www.elcomercio.com/actualidad/alianza-mapeo-en-lo-que-va-del-2022-ya-se-ha-producido-el-60-de-los-femicidios-del-2021.html>

10. Adoum, J. E. (2000). *Ecuador: Señas particulares* (6th ed., Vol. 1). Eskeletra Editorial.

1. Código Orgánico Integral Penal, el cuerpo de ley que regula el poder punitivo del estado ecuatoriano [@códigoo]. [↑](#footnote-ref-23)
2. Esta comisión constituye a varias diferentes instituciones gubernamentales, pero el reporte en cuestión está colgado en la página web de la Fiscalía General del Estado. En adelante, nos referimos a este esfuerzo como simplemente <<reporte oficial>>. [↑](#footnote-ref-25)
3. Recuperado de la base metodológica del reporte oficial[1] (párr. 5). [↑](#footnote-ref-26)
4. Según el reporte del Gobierno, se considera un homicidio intencional a “la muerte ilícita causada a una persona con la intención de causarle la muerte o lesiones graves”[2] [↑](#footnote-ref-27)
5. estadistica@fiscalia.gob.com [↑](#footnote-ref-31)
6. Femicidio (Art. 141), Homicidio (Art. 144), Asesinato (Art. 140), Sicariato (Art. 143) y Violación (Art. 171). [↑](#footnote-ref-32)
7. En general, el término feminicidio es diferente al femicidio debido a que el primero abarca un sentido político en contra del gobierno de turno por la falta del mismo ante el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, el feminicidio acarrea el concepto de la impunidad que un Estado desatento genera[4]. La Fundación ALDEA, quien reporta las cifras de esta iniciativa menciona “[el] término feminicidio […] alude a la responsabilidad estatal para el cometimiento de este delito”. [↑](#footnote-ref-41)
8. Este documento, publicado en 2014, dió paso a la investigación penal del delito de femicidio, lo que habría permitido al estado ecuatoriano tipificar el mismo en agosto del mismo año. [↑](#footnote-ref-46)
9. Véase[10]. [↑](#footnote-ref-51)